



Economía

Por qué ha fracasado el macrofondo de las pensiones

—P26

Por qué ha fracasado el macrofondo de las pensiones de Escrivá: no le interesa a nadie

La medida estrella para impulsar el ahorro complementario de la jubilación no logra despejar dos años después de su puesta en marcha

MIGUEL M. MENDIETA / RAQUEL PASCUAL MADRID

"Esto ha sido como pensar en el color del trampolín antes de construir y rellenar la piscina". Esa es la metáfora que utiliza Diego Valero, uno de los mayores expertos en pensiones de España, para definir lo ocurrido con el macrofondo de pensiones creado bajo el mandato del ministro José Luis Escrivá —ahora gobernador del Banco de España—. 18 meses después de su creación, no ha recibido ni un euro de aportación y, para colmo, parte de su cúpula ha dimitido hace apenas unos días.

El fondo de pensiones de empleo de promoción pública (FPEPP) iba a ser un pilar de la nueva arquitectura de ahorro para la jubilación. Cuando Escrivá se convirtió en ministro de Seguridad Social en 2020 encargó una profunda reforma del sistema partiendo de la base de que los planes de pensiones individuales eran regresivos (benefician más a las rentas altas) y se utilizan como vía de arbitraje fiscal. Por eso, topó a 1.500 euros al año el dinero que se puede aportar a estos vehículos y priorizó el ahorro vinculado a la negociación colectiva, en los planes de empleo. En estos es la empresa quien destina una parte del sueldo a aportaciones al fondo de pensiones de su plantilla. Y, con la normativa vigente desde entonces, se pueden meter hasta 8.500 euros al año y esta cantidad está exenta de tributación.

En España ya había en 2021 más de 115.000 millones ahorrados a través de planes de pensiones, aunque el 80% estaba en planes individuales. Pero el Gobierno quería que el ahorro privado se desviara a los planes colectivos. Y para ello, junto a los cambios fiscales, creó los planes de pensiones simplificados



Reunión de la comisión especial de control del fondo de pensiones de empleo de promoción pública. CEDIDA POR SEGURIDAD SOCIAL

(que acercaban las pensiones privadas a los autónomos) y el mencionado FPEPP.

Los primeros detalles se conocieron en febrero de 2022: el Estado contrataría a cinco gestoras privadas para que administraran el dinero que llegase al fondo. Las elegidas fueron VidaCaixa, Santander, BBVA, Ibercaja y Caser. Cada una ofrecería tres planes, y en total deberían alcanzar al menos 2.500 millones en tres años.

Dos comisiones

Para gobernar esta nueva figura se crearon la comisión promotora y la de control. La primera, compuesta por nueve funcionarios, se encargó de seleccionar a las entidades gestoras de los planes y nombrar a los miembros de la segunda. La comisión de control está integrada por cinco profesionales independientes (elegidos por Seguridad Social y que acaban de dimitir), cuatro representantes de sindi-

catos y cuatro de organizaciones patronales. Tras esta renuncia, desde Seguridad Social restan importancia a la decisión y atribuyen el cambio a que ahora se está en un momento distinto de la implantación del fondo. De hecho, fuentes de este organismo aseguran que "en un plazo muy breve se va a iniciar el proceso para seleccionar los puestos de miembros de la comisión de control especial". Pero lo cierto es que el dinero sigue sin llegar.

¿Qué ha pasado desde entonces para que el macrofondo no haya arrancado? ¿Por qué, una vez levantado el andamiaje legal, elegidas las gestoras, nombrados los miembros de las comisiones y constituidos los 15 planes, aún no ha llegado el dinero? Porque a nadie le interesa.

Distintos expertos consultados coinciden en la falta de interés generalizado entre los diferentes agentes que participan en el proyecto. En cualquier plan de pensiones

de empleo, o colectivo, hay varios actores e intereses en juego. Los principales, la empresa que lo promueve y los sindicatos, que integran de forma paritaria una comisión de control que se encarga de monitorizar cómo está administrando el dinero la gestora que tiene ese encargo. Con el macrofondo de Escrivá se ha querido prescindir de esas comisiones de control —al crear una genérica, que valiera para todos los planes— y se ha exigido a las gestoras que cobren una comisión de solo el 0,3% anual.

"Al final, el gran problema de este vehículo es que no le conviene a nadie", dice, bajo condición de anonimato, uno

Todos los independientes de la comisión de control dimitieron en bloque en mayo

de los miembros dimitidos de la comisión de control especial del FPEPP. "Los sindicatos y las empresas prefieren participar en comisiones de control particulares, de cada uno de los planes en los que participan. Aunque no es un trabajo remunerado, sí que se cobran dietas y a menudo se organizan eventos para sus miembros".

Falta de incentivo

Las gestoras de planes de pensiones tampoco tienen ningún incentivo en participar, puesto que las comisiones que cobrarían son mínimas. De hecho, en el primer gran acuerdo firmado ya con el nuevo modelo, el sector de la construcción y VidaCaixa decidieron optar por el plan de pensiones simplificado, en lugar de ir hacia el fondo de promoción pública.

El gran interesado en fomentar este vehículo era el Ministerio de Seguridad Social "pero, desde la salida de Escrivá y su equipo, el proyecto se ha desinflado y la nueva ministra [Elma Saiz] no tiene ningún interés en reactivarlo", explica una fuente que estuvo en la gestión del nuevo modelo de planes de pensiones. Sin embargo, desde la Seguridad Social aseguran lo contrario: "El impulso de segundo pilar sigue siendo una apuesta de este ministerio". Y como prueba apuntan a la inminente selección de los nuevos miembros de la comisión de control para sustituir a los dimitidos.

El gran acicate que se esperaba para el arranque del FPEPP era que el nuevo vehículo se pudiera hacer cargo del dinero que hay en planes de empleo promovidos por las Administraciones públicas. En España hay alrededor de 6.000 millones en planes de los funcionarios de la Administración General del Estado, de la Generalitat, de empresas públicas,

ayuntamientos... Pero con la crisis de 2008 se suspendieron las aportaciones. Tras casi tres lustros sin llegada de dinero nuevo, esos planes van menguando. "Es una cuestión muy ideológica, ni la ministra de Hacienda ni los socios de Gobierno creen en las pensiones privadas, por lo que es muy difícil que se reactiven", explica la misma fuente.

En esta línea, el director del área de previsión y pensiones de Mercer y vicepresidente de la Organización de Consultores de Pensiones (Ocopen), Miguel Ángel Menéndez, apunta a tres motivos claros por los que el macrofondo no funciona. El primero es que el Gobierno no haya depositado en él los fondos de las Administraciones, fundamentalmente el de la Administración General del Estado. "Que no hayan entrado los empleados públicos es crítico, porque habrían actuado como elemento tractor para las empresas", indica Menéndez.

En este punto, fuentes de la Seguridad Social admiten que "es cierto que reúne las características para poder integrarse en un fondo de pensiones de empleo de promoción pública abierto y se trabaja en esa dirección". Pero no se sabe cuándo será posible este trasvase.

El segundo motivo es que para que uno de estos planes se cree para todo un sector deben ponerse de acuerdo todas las partes (empresas y sindicatos) y, a veces, las organizaciones sindicales entre sí. Además, en tercer lugar, estos deben renunciar a su gestión y cedérsela a la comisión de control en la que están incluidos también profesionales nombrados por el Gobierno. "Los agentes sociales piensan: si yo promuevo un plan, lo quiero gestionar yo, no dárselo a terceros", añade este consultor.

Por ello, sugiere tres soluciones: que el Estatuto de los Trabajadores recoja el deber de negociar en los convenios colectivos este tipo de planes, siempre respetando la adscripción voluntaria de los trabajadores. Menéndez también propone que se incentive la participación en estos fondos de los trabajadores más jóvenes y aquellos con rentas más bajas. Y sugiere que los independientes de la comisión de control sean elegidos por los interlocutores sociales para que se impliquen más.